

Escasez e importación de alimentos

Andrés Cañizález*



Noviembre de 1980: Venezuela vivía uno de sus momentos críticos en materia de abastecimiento, y en su edición 429 la revista *SIC* alertaba sobre las implicaciones que tenía la importación de alimentos, como mecanismo para paliar lo que era un problema mayor y de fondo, la caída de la producción agrícola de nuestro país. La combinación de una menor dinámica endógena en el campo, junto con una chequera abultada gracias a los altos precios del petróleo, arrojaba como resultado una dependencia creciente de las importaciones de alimentos para satisfacer la demanda interna. Pero aun así, teniendo dinero para importar, los alimentos no siempre llegaban a tiempo y en aquel noviembre, 27 años atrás, como sucede hoy, en los anaqueles de los mercados brillaban por su ausencia la leche, los huevos, el azúcar, el aceite y la harina precocida de maíz.

Entre 1968 y 1978 el crecimiento de la producción agrícola había sido de 4,4 por ciento anual en promedio, mientras que las importaciones aumentaban a una tasa de 20 por ciento cada año. Esta disparidad en las cifras dejaba en claro que el país, en aquella década que cambió radicalmente la dinámica económica con el boom petrolero, estaba dando pasos agigantados hacia la dependencia alimentaria. Para nuestra revista, esta tendencia representaba un grave peligro en materia de seguridad, y era una política que tenía muchos límites, pues pese a contar con los recursos para -en teoría- importar todo lo que necesitábamos, algunos productos de la dieta básica de la población estaban escasos.

En tanto, cuatro décadas atrás en su edición 199, correspondiente a noviembre de 1957, *SIC* defendía la existencia de una educación privada católica, como paliativo ante las insuficientes políticas educativas del Estado, que no alcanzaban a toda la población en edad de matricularse. Adicionalmente, también con estadísticas demostraba que un niño educado por colegios católicos, le

resultaba menos caro al Estado en comparación con la inversión en las entidades públicas. No se trataba, obviamente, de apostar porque todo fuese educación en manos de entidades religiosas, sino de defender el derecho a existir libremente. En 1950, como recordaba la publicación, el 48,7 por ciento de los infantes venezolanos en edad de matricularse, estaba fuera del sistema escolar, y por tanto la cobertura educativa era un asunto crucial en Venezuela. Se hacía eco la revista del pensamiento del ilustre Miguel Antonio Caro: “dondequiera que los gobiernos confiaron la educación primaria a los hermanos cristianos o a otros institutos análogos, con pequeño costo se obtuvieron grandes resultados”.

Por otra parte, en el número 619 de *SIC*, correspondiente a noviembre de 1999, el historiador Manuel Donís alertaba sobre la inconveniencia de modificar la división político-territorial del país, tal como se había estado debatiendo para incluir tal temática en la Constitución que finalmente se aprobaría en diciembre de ese año. Para el estudioso, tal medida podía abrir una caja de Pandora, y recordaba que la integración territorial de Venezuela fue un proceso arduo que sólo se logró materializar en el siglo XX. No había sido un asunto menor el alcanzar una mirada nacional conjunta y como muestra de los problemas que podían surgir, el historiador recordaba que aún varios estados venezolanos mantenían (y mantienen hoy) discusiones sobre los límites fronterizos con sus vecinos.

Donís recordaba como a partir de 1859 y hasta finales del siglo XIX hubo una serie de transformaciones, a su juicio artificiales, de la territorialidad nacional para ajustarse a los “intereses de los gobernantes de turno”. Así, en pocos años el número de provincias se modificó en varias oportunidades, e incluso se cambiaron los nombres de los territorios. Por tanto, fue un logro poder articular y mantener en el tiempo un orden territorial, con un sentido compartido de nación.

* Miembro del Consejo de Redacción